

EDITORIAL

CHILE ANTE EL DILEMA DIGITAL:
ENTRE LA RETÓRICA Y EL REZAGO

En un mundo donde la conectividad es sinónimo de inclusión, productividad y competitividad, Chile enfrenta una disyuntiva clave: avanzar hacia una economía digital moderna o quedar atrapado en una estructura normativa obsoleta, trabas burocráticas y decisiones políticas de corto plazo. El sector de las telecomunicaciones, pilar esencial para el desarrollo del país, muestra señales de agotamiento frente a una institucionalidad descoordinada y una regulación que ha dejado de ser habilitante para transformarse en restrictiva.

Chile fue referente regional en despliegue tecnológico, liderando procesos de innovación en infraestructura digital. Hoy, enfrenta una preocupante pérdida de impulso. La compleja y lenta implementación del 5G, frenada por conflictos regulatorios, judicializaciones y falta de conducción estratégica, refleja los límites de un modelo que dejó de mirar el largo plazo.

El panorama regulatorio contribuye al estancamiento. Normas territoriales rígidas para instalar infraestructura, trabas a la compartición pasiva de redes y una neutralidad de red no adaptada a los nuevos modelos que demanda internet en tiempos de la IA, dificultan la inversión. A esto se suma la carga de costos por contingencias externas, como exigencias sobre baterías o autenticación biométrica, que erosionan la sostenibilidad económica del sector.

Más grave aún es la creciente utilización del aparato regula-

dor con fines político-electorales. Medidas como la postergación obligatoria de pagos durante emergencias o la intervención en la política tarifaria, cargando a las empresas de telecomunicaciones la limpieza de infraestructura sin uso, todo ello sin evaluación técnica, trasladan la carga financiera a las empresas sin que exista respaldo fiscal. Esto debilita la sostenibilidad del sistema y pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.

En este contexto, algunos sectores han comenzado a promover con fuerza añejos paradigmas de un mayor rol empresarial del Estado en telecomunicaciones. Aunque legítimas en el marco del debate democrático, estas propuestas requieren una discusión responsable sobre sus efectos en inversión, innovación y eficiencia. La experiencia internacional demuestra que donde el Estado actúa como operador, y no como garante de reglas claras y estables, se debilita la competencia y se frena el desarrollo. La realidad ha demostrado que son un fracaso como política pública.

Chile necesita una política digital de Estado. Una hoja de ruta que promueva la colaboración público-privada, modernice la institucionalidad, elimine barreras al despliegue y genere incentivos reales a la inversión privada, especialmente en zonas rezagadas y de menores ingresos. La transformación digital no puede quedar supeditada a cálculos electorales ni a pulsos ideológicos. Lo que está en juego es el desarrollo económico, la inclusión regional y territorial y el bienestar de millones de personas.

Chile fue referente regional en despliegue tecnológico. Hoy, enfrenta una preocupante pérdida de impulso.